

CONVENCIÓN NACIONAL BANCARIA
ACAPULCO, GRO. 1 DE MARZO DEL 2000.

EN EL DÍA DE HUERTO.

Para los fraternos dominicos en su calidad de gobernantes
formó el grupo de trabajo para la elaboración de la estrategia
administrativa y social de que se trate, una estrategia más
más madura que el año anterior, y que responda a las
productivas condiciones que se dan en el país, como lo es:
como el bantimismo, la desigualdad social, la desigualdad
desenvolvimiento social, la desigualdad económica, la
como lo bantimismo, la desigualdad social, la desigualdad
generar la estabilidad social, la estabilidad social, la estabilidad
del país.

Los últimos años han sido de mucha actividad en el país,
marcadas por la actividad política, la actividad económica
que se ha venido realizando, y la actividad social, que se ha venido
cada periodo de 3 años, que se ha venido realizando, que se ha venido
son bien entendidas, pero lo que se ha venido realizando en el que todos los
actores干涉idos en este problema, que está trabajado de modo real

y cotidiano nuestras posibilidades de desarrollo), empecemos a sentar las bases de un verdadero acuerdo nacional que permita superarlo de manera constructiva y dinámica, con una clara perspectiva que rebase las exigencias más inmediatas y proyecte hacia adelante las necesidades y posibilidades de desarrollo del país.

La subida que te ha querido dar a la exigencia anterior, presentada desde 1994, difícilmente podría considerarse una novedad. Esas lo sabía el gobierno. Lo saben los demás actores políticos en el Congreso. Lo saben los partidos políticos que no estuvieron en el primer turno. Los grupos de trabajo que se crearon para tratar el tema en común, especialmente los que tuvieron que ver con las reformas fiscales, imposibilitadas por la oposición de la Cámara de Diputados, lo sabían conforme avanzaba el año. No presentaron en su informe final sus vencimientos establecidos, ni se presentó en la Cámara de Diputados a caballo entre finales de 1999 y principios de 2000, la iniciativa de la administración de Vicente Fox Quesada para reformar el sistema social de pensiones. La propuesta de reforma de la Caja de Pensiones para el Fondo de Solidaridad, que se había prometido ser elaborada

en 2000, se presentó en febrero de 2001. De acuerdo se debió atrasar porque la relación personal que existe entre la alta

3

burocracia gubernamental y una parte muy significativa del sector financiero. La primera dejó de cumplir con las tareas de supervisión y regulación que tenía la obligación de llevar a cabo, permitiendo prácticas dolosas en y de las instituciones financieras, privilegiando consideraciones políticas por encima de la protección del interés de los ahorradores, en tanto que, por el otro lado, los precios bancarios y empresarios se favorecieron de esta situación. Por lo tanto, una primera condición para sostener este argumento es establecer una relación de mutuo tipo entre la autoridad monetaria y el sistema financiero del país, que debe ser de carácter independiente e independizada en su operación por las fuerzas políticas.

En segundo lugar, se ha de establecer que existe una serie de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para establecer una política monetaria que responda a las necesidades de desarrollo económico y social de un país. En particular, se ha de tener en cuenta la duración que se estima que debe durar la medida, ya que la situación grave de crisis que se vive en México, hace que se estime que el régimen de precios que se establece debe durar al menos durante la transición a la estabilidad, que se estima que debe durar al menos un lustro. Una vez establecida la estabilidad, se debe proceder a la reforma fiscal, que es la otra parte fundamental de la estrategia económica del Presidente. Es importante que se establezca la equidad pública con respecto a los contribuyentes y de modo que las medidas para establecer el régimen de precios se realicen y sus aliados

tiencen una incapacidad evidente para ampliar su horizonte más allá de lo que marcan sus intereses políticos y económicos de corto plazo, y hoy no pueden hacer más que culparse mutuamente de participar en ilícitos que en los hechos han recogido. Es necesario salir de esa lógica perversa e inmediatista y trivindica, tanto la acción de la política como la capacidad de la gestión económica para encontrar salidas constructivas al asunto bancario y financiero.

En particular, en lo referente a la operación de la información de los créditos que la auditoría de finanzas realizó como irregular e ilegales, es imprescindible que los representantes del gobierno y empresas involucradas en hechos del caso sepan que el criterio es unánime, que estos datos son información que no debe ser oculta, son el evidencia y constatación de lo que la justicia establece y requiere que tales datos sean presentados a la autoridad judicial con claridad y precisión.

Finalmente, se debe recordar que la situación de los bancos no es la única que ha llevado a la actual crisis, que es de fondo y de fondo social, que es la crisis de la economía financiera, que es la crisis de la economía y la explotación del ambiente, y que es la crisis de la cultura, de la cultura más geopolítica, que es la cultura dominante. El impalcimiento

democrático y progresista coincide con éstos planteamientos. Coincidimos, en efecto, en que el negocio bancario no podrá restablecer plenamente las funciones de intermediación que debe cumplir en la economía si aquellas condiciones no se satisfacen, lo que es necesario para que tanto la autoridad como los banqueros, cumplan debidamente con su función económica, con su responsabilidad social y con el necesario compromiso ético como parte que son de la sociedad que todos formamos.

Por eso debe establecerse a la mayor brevedad, el nuevo marco legal que regule las operaciones de crédito para combatir así a evitar prácticas abusivas sustentadas en la discriminación de tarificación de pagos, que en muchos sectores es una práctica habitual.

En particular, queremos recordar que existe hoy en un hermoso ambiente de cooperación entre el Banco Central de México y el Banco Interamericano de Desarrollo, una serie de recomendaciones y sugerencias elaboradas por el Comité de Asesores del BID, que recomienda la creación de una comisión mixta entre el Banco Central y el Banco de México, que sea encargada de establecer las normas y procedimientos para la regulación y supervisión del sistema financiero, así como para establecer el marco legal que permita la creación de un sistema de control y supervisión que responda a las necesidades de la economía mexicana. Esas recomendaciones han sido presentadas al presidente de la República, por supuesto, pero no han sido aún implementadas.

En consecuencia, reconocemos el valor de que el banco central tenga autonomía y que su objetivo sea el control del proceso inflacionario. Pero no, aceptamos qué en la búsqueda de que la inflación se reduzca, las actuaciones del banco central que limitan la liquidez del sistema y encarecen así el costo de los recursos, castiguen a los deudores elevando los intereses que deben pagar y castiguen, por ésta vía, también a los bancos, al aumentar su cartera vencida. Por ello pensamos que un gobierno responsable debe cuidar a los deudores, mediante la creación de un fideicomiso constituido con recursos públicos, que los proteja de los incrementos de las tasas de interés.

Todos sabemos también que desde agosto de 1994, el crecimiento en México, hace ya casi cuatro años, ha sido muy débil del sector bancario y financiero al desarrollo económico, lo cual ha sido negativo, considerándose en tanto que el sistema financiero, incapaz de lograr una adecuada absorción de la demanda de crédito. Al final del ciclo, el resultado es que el déficit en las arcas públicas, que se ha ido multiplicando, ha quedado vaporizado y vapuleado por el sistema financiero.

En consecuencia, debemos someter las finanzas públicas a la agresión hasta el punto de la neutralización de las pérdidas generadas por el sistema financiero. Ese costo, en su mayor

parte, deberá ser absorbido fiscalmente, de donde resulta que muchos banqueros y funcionarios bancarios, así como los muchos empresarios que de mala fe eludieron sus deudas y los funcionarios públicos involucrados en estos hechos y decisiones, tienen hoy una grave responsabilidad ante la nación. Seguiremos por tanto exigiendo, hasta que se cumpla con ello, que se den a conocer las listas de todos los defraudadores y se ejerzan las acciones que por ley deban ejercerse.

Por otro lado, debe plantearse como una prioridad la reducción del costo del Fobaproa. Una vía posible para lograrlo sería la reducción del interés que pagarán los papeles que substituyan a los pagarés Fobaproa, de modo que al momento de su intercambio permanezca la tasa de Cetes a 28 días y a partir del segundo año a partir de vencimiento, vayan reduciendo medio punto cada año. De esta manera, también los banqueros han contribuido a la disminución del tamaño del rescate bancario.

Durante estos años, hemos hecho lo que pudimos para impulsar en la vida política y económica de México cambios que han sido válidos. Hemos hecho lo mejor de lo que teníamos para pagarlos y a las autoridades competentes de la vida política mexicana y de la crisis bancaria, que tuvieron que hacer la defensa de frente a la nación,

La banca no cumple hoy con su función esencial de fomentar el ahorro y promover la inversión. En el país necesitamos de una banca comprometida con el desarrollo y no con la ganancia protegida mediante el financiamiento al gobierno, el fondeo seguro y hasta con la especulación. Sé muy bien que existe un amplio sector de banqueros profesionales que comparten esta visión económica y política. Además, desde el punto de vista empresarial y de los negocios, es una mejor práctica promover la actividad económica en un marco sostenible de rentabilidad, que mantener la reproducción de prácticas viciosas, que conforme a la experiencia reciente, terminan en crisis y en pérdidas del patrimonio de muchas familias, incluyendo el de no pocos banqueros.

Durante las últimas dos décadas se produjo un desafortunado desencuentro entre la banca y los pequeños y medianos empresarios, de la ciudad y del campo. La banca ha sido, objetivamente, una fuente adicional de la inflación generada por la política económica recia. Ha sido también la causa en que la economía ha sufrido de la inflación, y es así que cuando el crédito es poco o nada interesante, solo las empresas grandes y con recursos pueden enfrentar la�ra del país lo que equivale para los que no tienen esa oportunidad, a un impuesto de tipo regresivo.

Hoy, en este foro, los invito para construir un consenso que vaya en la dirección de legitimar la función económica y social de la banca del país.

Propongo que ese consenso incluya, primero, la construcción de un entorno de estabilidad económica que vaya más allá de su expresión primaria en las variables financieras y abarque las condiciones productivas y del bienestar de la población, una estabilidad que los mismos bancos tienen que contribuir a crear y a mantener.

En segundo lugar, que incluya la recreación de un horizonte jurídico que genere equidad y seguridad para las partes involucradas en las operaciones bancarias de ahorro y financiamiento, lo que debe darse junto con mecanismos eficaces de impunidad de justicia, de manera que ésta sea expedita y acabe con la impunidad que prima a la economía y a la sociedad en su creación.

Y, en tercer lugar, que establezca una norma de competencia bancaria que garantice la eficiencia en el uso y administración de los recursos y sus resultados, para los depositantes y para los deudores. Así, al tanto pagada una adecuada y suficiente capitalización de los bancos, si es necesario, con la participación de

capital extranjero, pero con el control de las autoridades reglamentarias y no sólo a partir de una apertura indiscriminada.

No rechazamos la apertura del sector financiero, pero seaños claros: estamos hablando de la capitalización y la competencia del sector bancario con capacidad efectiva de regulación y supervisión de las autoridades responsables, en el marco de un nuevo proyecto de desarrollo de la economía.

Queremos tener un discurso constructivo para ofrecerlo a la sociedad, incluyendo por supuesto a los banqueros. Nuestra capacidad de interlocución con el sector financiero es propositiva y amplia y se enmarca en una visión positiva del país, pues no somos parte del entramado de prácticas viciosas en que se gestó la fragilidad del sistema bancario y que finalmente condujo a su crisis actual.

En nuestra perspectiva, el futuro del país a pesar de tantos rezagos acumulados, de tantas debilidades, de tantas tensiones que es momento de superar, tiene un gran potencial de desarrollo para todos. Aprovechar bien ese potencial tiene como condición que se respete la ley y que cada quien cumpla con su deber. En ese escenario de futuro, ubicamos el funcionamiento de la banca privada, cumpliendo a plenitud sus labores de intermediación y

financiamiento para ampliar la base de capital de la economía. Vemos así también a un banquero cuya imagen social se recupere y sea muy distinta a la que hoy tiene.

Estamos preparados para dar los pasos políticos que nos correspondan como gobierno de la Alianza por México para construir el amplio consenso nacional que se requiere para empezar a superar, en serio y de raíz, la crisis bancaria. Ahora, son ustedes, los banqueros, quienes tienen la palabra.